

A PROPOSITO DE REVUELTAS...

El cineasta chileno Patricio Guzmán dice en su película “Mi país imaginario” que, si quieres firmar un incendio, tienes que pararte frente a la primera chispa. Este puede ser el sentido de los siguientes relatos, que son una serie de crónicas escritas al calor de la conflagración que supuso el levantamiento chileno de 2019 y en la que los acontecimientos fluyentes y coetáneos suscitan un discurso y una reflexión urgente como forma de registro y catarsis de lo que ocurre inmediato. La crónica de quién observa y participa en el devenir de la historia es también una forma de reproducir la propia vida y el pensamiento en el presente, estableciendo un claro antes y después de la vida chilena tal como se entiende comúnmente, al mismo tiempo que acerca al lector más cerca de los acontecimientos de los movimientos de resistencia social de lo que es posible a través de cualquier distancia en el tiempo mayor que la duración de los propios movimientos. El autor se convierte en un participante activo en los eventos de las historias que cuenta, y el lector obtiene una visión de primera mano de la vida del autor y de las luchas que superó.



Kalil Abu-qalbein Koda²⁰

Palabras finales

Como indica la norma, la introducción se hace al final. Escribo este modesto artículo habiéndose finalizado la Convención Constitucional como órgano constituyente de la República de Chile, cuyo mandato

fue redactar una propuesta de Nueva Constitución en un plazo de, exactamente, un año y un día de ejercicio. No obstante, es importante distinguir que el proceso constituyente es distinto al proceso constitucional.

El primero es cuando se suscita el proceso mediante el cual se generan las condiciones para la creación de

una nueva Constitución. Mientras que el segundo es el órgano o la asamblea que deriva del mismo proceso, con el fin de presentarle al soberano —es decir, al pueblo o a los pueblos de Chile— una propuesta de nueva Constitución. Si bien la convención es un órgano colegiado del Estado, creado única y exclusivamente para estos fines, compuesto

²⁰ Estudiante de grado de la Universidad Austral de Chile (UACH)

por representantes políticos electos democráticamente, con el tiempo ya mencionado, el proceso constituyente es un tanto más amplio y complejo en su exposición. Es decir: ¿cuándo se crean realmente las condiciones para la creación de una nueva Constitución? ¿Quiénes son los que la generan? ¿Cuáles son los hechos taxativos que la delimitan? ¿Cuándo finaliza? Son algunas de las interrogantes que emergen y que rondan por los centros de pensamiento y por las calles del país.

Algunos sostienen que el proceso constituyente es siamés con el nacimiento de la Constitución aún vigente, la del 80, debido a su aberrante ilegitimidad de origen. Sin hondar mucho al respecto, los hechos hablan por sí solos. Fue creada desde las entrañas de la dictadura militar chilena (1973-1989), elaborada por la Comisión Ortúzar, una comisión «de expertos» designada por la Junta Militar, compuesta por una mujer y siete hombres (en todo el proceso participaron once en total, pero siempre siendo una mujer y siete hombres), todos abogados de derecha que durante cinco años (1973-1978) sesionaron para presentarle al Consejo de Estado y a la Junta Militar de Gobierno el anteproyecto elaborado. Este, después de dos años y de ciertos ajustes, se sometió a un plebiscito único de salida (no hubo de entrada) y, cual ejercicio ratificadorio, fue escandalosamente irregular y viciado. Obviando el hecho de que fue gestada de facto en dictadura militar, entre los fraudes más graves se destacan

la inexistencia de registros electorales, los cuales fueron abolidos por la misma Junta Militar, el escrutinio de votos de personas fallecidas hace mucho tiempo, la abierta censura y persecución a la oposición y el monopolio comunicacional de la junta para llamar a aprobar, aprobar y solo aprobar la Constitución, como una cartilla más de los cantos militares.

Aquella Constitución, que al leerla parece más una biblia militar y empresarial que el reflejo de una sociedad, se mantuvo impertérrita hasta el año 2005, cuando el presidente Ricardo Lagos (Partido Socialista) le hiciera una serie de reformas constitucionales mediante un proyecto de ley. Fueron 58, pero en realidad importaron cuatro, que cambiaron los llamados enclaves antidemocráticos, los cuales fueron: disminución del periodo presidencial de seis a cuatro años, facultad exclusiva al presidente para invocar al Consejo de Seguridad Nacional, más facultades fiscalizadoras a la cámara de diputados y eliminación de la designación vitalicia a senadores. Lo que Lagos hizo en realidad fue atenuar el carácter autoritario de la Constitución, distribuir levemente el poder hiperconcentrado previamente brindado, más que hacer una nueva carta magna. Asimismo, durante el segundo período de Michelle Bachelet (Partido Socialista) también se llevó a cabo un ejercicio parecido al de Lagos, con la diferencia de que en esta oportunidad hubo un intento de participación ciudadana, mediante campañas de educación cívica y constitucional, diálogos y cabildos

ciudadanos y la elaboración de ciertas propuestas bases para una eventual convención convencional, pero que, sin embargo, no tuvo ningún impacto en el ordenamiento jurídico, ya que el Gobierno sucesor (2018-2022), de Sebastián Piñera (Renovación Nacional), rechazó continuar con el proyecto. Es decir, con Lagos hubo reforma sin participación, y con Bachelet hubo participación sin reforma. Ambos fueron intentos fallidos que lejos estuvieron de superar sustancialmente la Constitución del 80 y, por lo tanto, el régimen emanado de la misma.

Entonces, ¿cuándo se inicia el proceso constituyente propiamente tal? Considerando el breve devenir histórico señalado, este proceso se ha ido gestando en el tiempo, pasando por diferentes etapas. Así, el proceso constituyente último, el que genera las condiciones para una nueva Constitución, se suscita cuando la historia se rompe. Esto es, el 18 de octubre del 2019, fecha que cristaliza el estallido social de Chile, el cual, sin lugar a duda, ha significado un quiebre en la correlación de fuerzas políticas al interior del país, que ha impactado a la institucionalidad y a la sociedad. ¿Y cuándo finaliza el proceso constituyente? Cuando empiece otro que lo suceda, o cuando se acabe por implementar el régimen diseñado.

Estas crónicas, escritas cada una al calor del momento, se sitúan en este proceso constituyente último. El cual, como ven, aún está abierto, en movimiento, en construcción.

Asimismo, se sitúan en un momento muy personal. El proceso constituyente coincidió con el proceso de enfrentarme a la tesis en antropología, el cual, lamentablemente, aún está abierto, en movimiento, en construcción. Durante estos casi tres años me he convertido en un cuasi antropólogo por excelencia. He participado activamente en innumerables instancias, contando siempre con la indefinición de mi categoría semiprofesional: entrevistas en radios, seminarios, conversatorio, foros, artículos de opinión, trabajos a honorarios, consultorías, asesorías, entre otros, los cuales sirvieron para ejercitar un desarrollo cognitivo que se veía frustrado por el estancamiento de este eterno tesista. La última gran excusa fue la llamada repentina, directa y sin

intermediarios de una convencional constituyente a las tres semanas de haberse inaugurado la convención, para que trabaje a su lado, codo a codo, durante todo este proceso. Claro que acepté, ¿cómo no? Si la titulación siempre estuvo cerca, pero lejos a la vez. Como lo contradice la norma, empecé a ejercer antes de titularme. Escribo este modesto artículo prometiéndome que terminar la tesis es lo próximo que haré. Mientras tanto, ha trascurrido un estallido social, una pandemia, una convención constitucional.

5 de julio 2022

Santiago, Chile.

¿Y nosotros cuándo?

Un día después de que Piñera afirmara que Chile era un verdadero oasis

con una democracia estable en medio de una América Latina convulsionada y sin rumbo, haciendo gala de altivas estadísticas empresariales, que año tras año sumaban hazañas al milagro chileno, asistí a una conferencia abierta en la Universidad Austral de Chile llamada, precisamente, «América Latina en la geopolítica del imperialismo». La charla magistral fue dictada por Atilio Borón —reconocido intelectual argentino de nacimiento, pero latinoamericano por convicción—, según su propia autopresentación. Como se esperaba, la jornada fue de gran nivel y de alta convocatoria, no solo por la eminencia del invitado, sino sobre todo por la pertinencia del momento.

Si hubo algo en lo que el presidente Piñera no mintió ni erró fue que, ciertamente, América Latina se en-



contraba atravesando por un periodo particularmente inestable. En su mayoría, la derecha gobernaba los países de la región y, por consiguiente, articulaba en los ejecutivos un poder político cuyo último precedente se había dado en las alianzas de las dictaduras de los 70. El tridente Macri-Piñera-Bolsonaro, de Argentina-Chile-Brasil, respectivamente, constituía un bloque aparentemente compacto de las derechas sudamericanas. A este tridente, entonces, se le sumaban, entre otros, los jefes de Estado de Paraguay, Perú y Colombia. Mientras que las izquierdas, postergadas de los espacios de gobiernos y aisladas a nivel regional, en buena parte por la acometida a Venezuela y su instrumentalización como el reflejo de un supuesto fracaso anunciado del que hay que huir a como dé lugar, se desplegaban en los territorios donde se cultivaba el descontento popular, herido en 30 años de neoliberalismo desenfundado.

Como latinoamericanos y latinoamericanistas, nos encontrábamos entusiasmados y un tanto anonadados por las movilizaciones a nivel nacional ocurridas en Ecuador hace algunos días. El Gobierno de Lenin Moreno, cuya orientación política se basó, supuestamente, en un socialismo moderno e inclusivo del siglo XXI, anunció la implementación de un paquete de reformas políticas, económicas y sociales al buen estilo neoliberal: eliminación o reducción de aranceles (impuestos que entran y salen del país) para incentivar la inversión, reducción de impuestos para la macroindustria del banano,

liberación del precio de los combustibles (eliminando el subsidio y cualquier tipo de regulación). Y, al mismo tiempo: despido de más de 20 mil burócratas para reducir el gasto público, reducción de vacaciones para empleados públicos de 30 a 15 días al año, posibilidad de renovar los contratos por con un 20 % menos de remuneración, entrega de millones de dólares de crédito hipotecario, y el mezquino aumento de 15 dólares mensuales a los bonos de emergencia familiar. Se le llamó «el paquetazo», como el disparo de un tanque que arremete con alevosía contra un vapuleado pueblo.

El pronunciamiento desde las entrañas del Ecuador no tardó en resonar. El Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación de Nacionalidades Indígenas y el Frente Popular, entre otros, se articularon como representantes populares de la oposición frente a un gobierno solitario e insólito. Los acontecimientos se suscitaron y evolucionaron con rapidez. Consideremos que estas medidas fueron declaradas el 1 de octubre; el 2 ya comenzaron las movilizaciones; el 3 buena parte del país se encontraba en paro nacional y con punzantes protestas; ese mismo día se decretó estado de excepción en ciertas regiones. El cuarto día, amaneció con los militares armados en las calles y en Estado de emergencia nacional. El quinto día ya se contaba con la marcha masiva de indígenas y obreros rumbo a Quito, con destino a la casa presidencial. El séptimo día tuvo como hito el traslado del presidente a Guayaquil, por razones de

seguridad. Y así seguía y sumaba. La indignación popular se precipitaba con mayor solvencia que la infladas e insidiosas reformas económicas.

Nosotros nos encontrábamos en el día 11 y la mirada de Boron al respecto entregó ciertas claridades. Ni Estados Unidos ni el imperialismo global contaban con la hegemonía que gozaron durante tantos años, debido a la emergencia de potencias mundiales como China, que no estaban en su hoja de ruta o no tan pronto al menos. Este eventual declive les pujó a tomar medidas coercitivas aceleradas, que se encuadran justamente con las exigencias del Fondo Monetario Internacional hacia los Estados Latinoamericanos que suelen amedrentar. Por otra parte, el politólogo sostuvo que el poder de los países no reside en la presidencia propiamente como tal, sino en «el Estado Profundo», cuyo núcleo es el entramado de instituciones propias de la globalidad imperialista que no son electas por nadie, pero que nos gobiernan a todos y a todas. Sin perjuicio a ello, yo agregué, silenciosamente para mí, que el «Estado Profundo» en verdad es inherente al territorio donde este se sitúa y descansa ahí, justo donde reside la soberanía, por más cliché que suene. Es decir, efectivamente hay un dominio del poder global, pero también hay enclaves donde pueden ejercerse ciertos niveles de autonomía, ¿cierto?

Finalizando la charla, durante la ronda de preguntas, hubo un diálogo que me estremeció. Un joven comunista chileno le preguntó al

experto comunista argentino: ¿Por qué Chile, siendo tan neoliberal e injusto institucionalmente, es tan sumiso? ¿Por qué —continuó— hay tan pocos movimientos sociales protestando y por qué estas protestas son tan leves? ¿A qué se debe —remató— este adormecimiento? Sin embargo, yo no estuve de acuerdo con el planteamiento, ya que siempre me ha parecido que Chile cuenta con una pluralidad de actores políticos dentro, pero sobre todo fuera de la institucionalidad, que tienen un carácter realmente contestatario: movimientos indígenas, estudiantiles, feministas, pescadores, portuarios, defensores de la naturaleza, de la memoria, de la verdad histórica y la justicia integral, y un largo etcétera. El problema es que se encuentran desarticulados entre sí, o sin la articulación necesaria para reestructurar al aborrecido régimen político.

Lo que sí compartí absolutamente fue la inquietud subyacente del compañero: ¿Es posible generar cambios estructurales en Chile? Y, de ser así, ¿cuáles son las vías para realizarlos? Pese a nuestra juventud, llevamos años reflexionando y combatiendo al calor de estas interrogantes. Desde el retorno a la democracia hemos observado que la clase política y el poder constituido no presentaban ninguna alternativa al modelo; es más, bloqueaban sistemáticamente las legítimas y razonables alternativas que emergían de los movimientos y la sociedad civil en general. Difícil tarea. En estos 29 años de democracia el modelo neoliberal parecía infranqueable. De

hecho, este momento del cual hablo concurre en el *peak* de la expresión política del neoliberalismo.

Boron acompañó la pregunta con una sonrisa sutil y explicó que a su parecer en Chile las bases estaban bastante organizadas, los movimientos bastante movilizados, las injusticias bastante injustas y las desigualdades bastante holgadas, pero que sin embargo se requería de una vía que supiera canalizar todos estos impulsos y conducirlos a un proyecto político transformador. «El llamado es a no dejar de luchar, compañero», sostuvo.

Ese día fue 11 de octubre del 2019 y abordamos el caso ejemplar de Ecuador para preguntarnos: ¿Y nosotros cuándo?

12 de octubre de 2019

Valdivia, Chile.

Cuando llegaron los alienígenas

Justo cuando presentíamos y sentíamos que este sistema no daba para más, que después de décadas de desconecto social, del bloqueo sistemático a las transformaciones sociales que durante tanto tiempo reclamó la ciudadanía, del abuso indiscriminado del poder político y económico, de las burlas y las connotaciones despectivas por parte de la elite arbitrariamente gobernante, estalló. La legítima indignación popular fue acumulándose año tras año como una olla a presión hasta que reventó, de manera un tanto repentina, por cierto, pero inminente al mismo tiempo.

El segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) antes del estallido ya se había convertido en el gobierno con la más baja aproba-



ción en toda la historia de Chile, con un 14 %, superando así, sin ir más lejos, al Gobierno que lo antecedió, el segundo de Michelle Bachelet, que en ese entonces había alcanzado el mínimo histórico del 18 %. Es decir, la popularidad de los gobiernos en Chile, en al menos los últimos seis años, estuvo sumergida en una depresión con respecto a su representación, alcanzando mínimos históricos y solo superándose para hacer más baja su aprobación.

Aun así, lo de Piñera fue realmente insólito. Administraron al Estado como si estuvieran administrando una empresa. De hecho, esta era justamente una de las razones que lo llevaron a ser presidente. La gente comentaba que su experticia como empresario brindaba de por sí una tremenda garantía como presidente. Grave error. Como lo indica su historial, a estas alturas portuario, Piñera siempre fue un empresario ambicioso, abusador y desleal, que siempre prefirió el interés particular sobre el general y que, a costa de sus escabrosos negocios, podía hacer cualquier cosa.

Sumado al peso de un modelo estructuralmente desigual y violento, su gabinete, emparentado con él, arrojó indiscriminadamente y en reiteradas oportunidades declaraciones ofensivas hacia la población. En abril del 2019, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, muy cercana al Gobierno, llamó «patipelao» a la gente por pedir una reducción a la dieta parlamentaria, una de las más elevadas del mundo, por cierto. En

julio del mismo año, el ministro de Educación, Gerardo Varela, mandó a los establecimientos de educación pública a hacer bingos para enmendar los graves déficits de infraestructura de los colegios. «¿Por qué tengo que venir yo de Santiago a arreglarle los techos? ¿Por qué mejor no hacen un bingo? Esos son los riegos del asistencialismo...», sostuvo, sin tener idea, claro está, que de hecho hacer bingos dentro de los colegios está prohibido por ley. Unos días después, el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, sostenía que el atosigamiento de pacientes en los consultorios en la madrugada se daba porque, en realidad, la gente «va temprano al consultorio a hacer vida social», a eso de las cinco o seis de la mañana. El irrespeto de quienes detentaban el poder hacia la ciudadanía, y el majadero discurso de criminalizar a cualquier tipo de legítima movilización, no pasó desapercibido. Todas estas declaraciones no solo reflejaban la desconexión de la élite gobernante con la realidad social, sino que también demostraban cómo, ya embriagados de poder, seguían bebiendo inescrupulosamente del sudor de la gente mientras le escupían en la cara, como si ya de por sí no le sobraran razones al Chile humilde para sublevarse.

Octubre amaneció con la polémica del alza del precio del metro de Santiago. Si bien eran unos aparentes inocentes \$30 de aumento durante los horarios punta, fue un ajuste riesgoso del Gobierno que no paraba de subir los precios y que mer-

maba todo proyecto orientado hacia el bienestar de las familias, como el aumento del sueldo mínimo o la reducción de las horas de trabajo. El ministro de Economía, Andrés Fontaine, trató de aplacar las críticas echándole bencina al fuego, señalando que el precio se mantendría e incluso bajaría \$10 para quienes tomaran el metro a las 7 a.m.: «se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja». Al que madruga dios lo ayuda, o algo así. Esto fue la gota que rebalsó el vaso.

El lunes 14 de octubre comenzaron las evasiones masivas de estudiantes secundarios en las estaciones de metro. Si bien no les afectaba esta alza, sí a sus familias, a sus vecinos, a su gente. «¡Evadir, no pagar, otra forma de luchar!» fue la consigna del famoso salto del torniquete, una barrera de seguridad tan automatizada como endeble, la cual fue superada con el sencillo pero valiente acto de simplemente saltarlo. Como de costumbre, las fuerzas represivas no tardaron en intentar aplacar con fuerza esta protesta innovadora, pero se vieron desbordados por los cientos de estudiantes, a los cuales se les sumaban ciudadanos de todas las edades, que no tardaron en sumarse. Pese a lo no-violento del actuar, el oficialismo lo catalogaba como de violencia extrema, casi llegando a una especie de terrorismo, aun cuando solo se estaba evadiendo el pago del transporte. La noticia recorrió al país y se vislumbraba una nueva grieta al modelo, que hace tiempo hacía agua por todas partes. Quedará

para la historia que el expresidente del directorio del Metro, Clemente Pérez, le bajó el perfil a la situación y salió a decir por televisión, con la arrogancia de siempre, «Cabros esto no prendió. No son más choros, no se han ganado el apoyo de la población [...]. La gente está en otra, el chileno es bastante más civilizado y lo único que he visto es un gran rechazo a este tipo de actitudes». De ahí en más las protestas solo aumentaron y se diversificaron en todo el país.

El 18 de octubre fue cristalizado como la fecha del estallido social, y con razón. Esa noche fue la eclosión de la revuelta cuando fueron incendiadas más de 130 estaciones de metro, 16 buses y el edificio de distribución eléctrica ENEL. Sospechoso, por cierto. Quedan varios cabos sueltos al respecto. El día anterior, cuando se veía que algo grande iba a suceder, se le captó al presidente cenando pizza tranquilamente en un restaurante; un día después, se desató el caos. Nos preguntamos quienes seguimos de cerca las movilizaciones y estábamos acostumbrados a los sistemáticos montajes de la policía: ¿qué grupos en Chile tienen realmente la capacidad de semejante gesta? ¿Por qué estaban abiertas las entradas del metro cuando deberían estar cerradas? ¿Dónde están los videos de las cámaras del metro que cuenta con vigilia nocturna y permanente? ¿Cómo es que se gestó semejante ataque sin que la policía pudiera preverlo, intentar detenerlo o dar aviso? Aun con estas legítimas interrogantes, lo único claro es que,

como se señaló, Chile despertó de la larga noche de 30 años de neoliberalismo brutal, y se había apropiado de las calles para protestar con una masividad nunca antes vista.

Al día siguiente, Piñera decretó Estado de emergencia por convulsión social, levantando un toque de queda que restringía las libertades personales por primera vez desde el retorno a la democracia, en las zonas más álgidas de la región metropolitana. Esta fue una medida inédita, tomada a partir de las insurgencias acaecidas y, pese a que aprovechó de suspender el alza del metro, la mecha ya se había prendido y no pudo enfriar ni descomprimir el descontento social. El pueblo se había cansado de ser burlado y pisoteado y se estaba manifestando, ya no solo en Santiago, sino en todos los rincones del país, con una inédita simultaneidad.

Ese 19 fue el día que la mecha del estallido llegó a Valdivia. En casa me encontraba durante esa noche, expectante de las movilizaciones que se precipitaban en todo el país, hasta darme cuenta de que, sin ir más lejos, en el centro de Valdivia estaba ocurriendo también. El casino, el McDonald's, el *mall*, las grandes cadenas de tiendas y supermercados, la municipalidad, estaban siendo saqueados: sus productos, muchas veces incansables para el bolsillo popular, repartidos a las afueras de las tiendas y, finalmente, incendiados. Ediles todos del neoliberalismo donde la gente descargó la rabia y hacía justicia por sus

propias manos. La revolución había llegado casi sin darnos cuenta. Yo y mi familia, entusiasmados pero preocupados también por lo incontrolable, confuso y desafortunado que puede llegar a ser el contexto, cruzamos los dedos para que los dos pequeños locales comerciales de mi padre no quedaran envueltos en llamas. Ambos se encontraban en pleno centro de la ciudad; de hecho, justo en la esquina donde se libraba el combate acérrimo. Sin perjuicio de lamentables excepciones, el pueblo subversivo fue criterioso en discriminar entre el comercio local de las familias, que casi en su totalidad ni un rasguño se llevó, y las grandes cadenas transnacionales, que casi en su totalidad fueron fuertemente castigadas. El llamado era a estar muy atentos, unidos y comunicados por las redes sociales (en ese momento, el canal más fidedigno para informarse).

Al día siguiente, ya con el estallido flameando en todo el país, Piñera decreta Estado de Emergencia a nivel nacional, señalando, en sus propias palabras, que «estamos en guerra, contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie». Mientras que las calles se copaban mañana, día y noche, por multitudinarias marchas en las que se pedían cambios estructurales y en las que se aclaraba que el pueblo no estaba en guerra. Las fuerzas represivas del Estado se tomaron muy en serio las declaraciones del presidente. Todas ellas salieron armadas a las calles, bajo los efectos de drogas duras, cocaína precisamente, la

cual consumían en gran cantidad y a destajo mientras golpeaban y disparaban con descriterio a la gente. Sus declaraciones no hacían otra cosa que evidenciar la manera en que siempre han operado. «No era cocaína, era mentholatum», decían. «Carabineros no viola los derechos humanos», agregaban. Mientras cientos de videos capturados por chilenos y chilenas circulaban todos los días captando infraganti cómo se descubría a carabineros, en prácticamente todo el país, drogándose, o evidentemente drogados, en el ejercicio de sus funciones, y cómo, una y otra vez, abusaban en el uso de la fuerza y las armas. Fue como volver a los tiempos de Pinochet, para quienes lo vivieron, y nosotros, los de esta generación, nunca estuvimos tan cerca de los 80. La bota militar volvió a patrullar permanentemente las calles. Volvieron los muertos, los detenidos desaparecidos, las zonas clandestinas de tortura, los mutilados. En un tiempo récord, Chile se convirtió en el país con mayor índice de trauma ocular ocasionado por los disparos de perdigones policiales, superando así a nada más que las fuerzas de ocupación sionista y sus permanentes ataques a la población palestina. Aun así y con todo, se veían absolutamente desbordados. Ni con todo el contingente nacional podían contener a todo un país marchando por dignidad y, como se escuchaba en las calles, «hasta que la dignidad se haga costumbre».

El 21 de octubre se convocó a un paro a nivel nacional, generándose la marcha más grande en toda la his-

toria. Al Gobierno no le quedaban recursos humanos ni discursivos para poder truncar ni deslegitimar las movilizaciones. En ese momento, su aprobación caía al 4 %, convirtiéndose en el presidente con menor aprobación en toda la historia democrática, no solo de Chile ni de América Latina, sino de todo el mundo y su historia. El 22, como una demostración de la irreversible crisis acaecida en su mandato, se filtró un audio de la primera dama, Cecilia Morel, que en un descuido hiló una frase que reflejó muy bien la honesta percepción de la elite ante la acometida del pueblo: «Es como una invasión alienígena, y no tenemos las herramientas para combatirla [...]. Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios, y compartirlos con los demás». La monarquía contemporánea tenía los días contados; los alienígenas llegamos para recuperar lo que nos arrebataron.

28 de octubre de 2019

Valdivia, Chile.

El terreno en contexto

El jueves 14 de noviembre del 2019 llegué a San Pedro de Atacama para realizar mi primer terreno en el marco de la tesis de pregrado. Me costó salir de la vorágine del estallido porque, como nunca, cada día parecía escribirse la historia, y ni una página me quería perder. Más aún, este 14 de noviembre fue un día muy especial. Se conmemoraba un año del asesinato de Camilo Catrillanca, comunero Mapuche de Temucucui, por parte del comando jungla, la po-

licía militarizada creada por Piñera. Esto, considerando la coyuntura, intensificó aún más su memoria. Por otra parte, al otro lado de la frontera, el contexto político de Bolivia era tan álgido como el de Chile. Tan solo cuatro días antes, Evo Morales había renunciado de manera obligatoria a la presidencia que apuntaba a ser su tercer gobierno consecutivo, asegurando un golpe de Estado en su contra luego de que se le acusara de fraude electoral. La sucesión constitucional de Jeanine Áñez Chávez, en vez de descomprimir las tensiones, más bien las aumentó, acrecentando la escala de violencia al interior del país. Esto era, evidentemente, un panorama desfavorable para realizar una investigación que podría ser malinterpretada o verse afectada por ciertas desconfianzas razonables de comunidades en posible estado de alerta.

Esta situación ameritó redireccionar el terreno hacia el noreste de Argentina, específicamente a la localidad de Susques, lo cual no presentaba una desviación tan importante en distancia ni tan distinta del marco investigativo elaborado. Al igual que Quetena Chico, es una comunidad atacameña del altiplano dedicada a la ganadería y con un secular pasado como arrieros, cuya impronta ambiental dificultó el sojuzgamiento de los distintos procesos de conquista, gozando así de cierta autonomía en el tiempo que comenzaría a declinarse, sobre todo, durante los procesos de integración nacional a principios del siglo XX y, luego, con la fronteri-



zación del territorio tripartito en los 70. Como la mayoría de las comunidades de la circumpuna, la relación con los Estados nacionales es más bien lejana, pues estas áreas, consideradas decimonómicamente como «despobladas» se han visto desamparadas de los intereses nacionales, salvo cuando emerge un auge económico preponderante, como lo es hoy el turismo. Si bien San Pedro de Atacama es la comuna chilena más cercana a Susques, cuyo trayecto en diagonal está custodiado por la cordillera y la Reserva Nacional de los Flamencos, no existe un transporte que sea directo. El único que hay se dirige hacia Jujuy y, pese a pasar por fuera de esta localidad, no hace parte de su itinerario; además,

sus salidas son escasas y, si no se compra el boleto con anticipación, se agota fácilmente. Justamente, este fue el inconveniente que imposibilitó ir hacia el nuevo destino. Lo cierto, entre tan alterable contexto, es que la movilidad era tan esencial como titubeante, y más aún con las vigorosas protestas a un lado y otro de la frontera.

No obstante, se pudo constatar que seguían funcionando con normalidad los viajes turísticos hacia el altiplano boliviano. Al parecer, tal inhóspita localización las excluía de las confrontaciones que yacían latentes en el interior, por lo que se decidió, finalmente, seguir con el plan inicial. Aunque, de igual mane-

ra, los inconvenientes del transporte continuaban. La única movilidad a la que se podía acceder para llegar a Quetena Chico era la ofrecida por las agencias de turismo que venden el paquete completo: vale decir, hacer los recorridos correspondientes y llegar a ciertos nodos de los circuitos, como Tupiza o Uyuni, pernoctar y volver. Evidentemente, yo no andaba en aquellas andanzas, por lo que tuve que negociar con los vendedores. El panorama más viable era que algún transfer me dejara en el paso fronterizo de Hito Cajón y de allí arreglar con otros transportistas para llegar a la comunidad. Si bien la distancia entre la frontera y esta son apenas de 150 kilómetros, las aleatorias huellas de vehículos trazados en

la llanura del desierto de Lípez significaban un viaje de, al menos, cuatro horas. Muchas agencias se negaron si quiera a conversar un precio razonable, explicando que simplemente no podían dejarme a mi suerte en la frontera, constreñidas por exigencias normativas y morales (o, al menos, eso sostenían). Otras, más flexibles, accedían al inhabitual trato que les ofrecía, pero tan solo rebajaban un poco el precio original, siendo una diferencia bastante holgada en los servicios desistidos. Finalmente, un colega que había ido un par de veces a la comunidad, y con quien por esta razón me contactaron, me compartió un buen dato que surtió efecto. La agencia «Sol Andino» aceptó el trato y me vendió el pasaje a buen precio, sin incluir el desayuno, debido a mi anticipada parada. Fue enfático en la puntualidad del transporte: a las 6:45 tenía que estar en el terminal de buses sin tardanza.

Asegurada la mitad del trayecto, me sumé a la convocatoria para la anunciada manifestación que comenzaba a formarse en la plaza central, donde se podía identificar claramente cómo llegaban los diferentes grupos étnicos para organizar la marcha. Sin perjuicio de que aquella normalidad estaba marcada por protestas ubicuas en todo Chile, que día tras día exhibía la indignación social, este era un día especialmente sensible. Nuevamente, un comunero mapuche había sido víctima del terrorismo de Estado, sumando un nombre más a la incommensurable lista de la colonización moderna, que hunde sus raíces a los

orígenes de la República. El gran diferenciador fue que esta vez los medios de comunicación tecnológica y la masiva vigilia desmontaron los fallidos intentos de los agentes de Estado para falsear los hechos a fin de excusarse. Si bien el estallido apuntalaba a la crisis total del sistema imperante, aquella jornada en particular nos inducía a reflexionar crítica y colectivamente en la histórica relación del Estado con las primeras naciones que lo precedieron y que nunca han dejado de estar.

De esta naturaleza fue el discurso que líderes y dirigentes atacameños sostuvieron en la plaza para dar inicio a la marcha que, una vez encaminada, rápidamente se teñía con los colores y sonidos andinos. El júbilo que sentí fue gratamente distinto al experimentado en el sur. Pese a tener una convocatoria entendiblemente más acotada, el hecho de contemplar la rica interculturalidad entre los pueblos del norte y la sociedad civil chilena de las que también forman parte fue grandioso. La honorosa mención de lucha y resistencia del pueblo Mapuche, como lo particular, y la esperanza que se asomaba para superar los avatares del neoliberalismo como lo general, llenaron de entusiasmo lo que parecía haberse secado con el paso del tiempo, al calor del avance de la modernidad y su industria extractivista.

Revestida como carnaval, con total ausencia de policías custodiando y exenta de cualquier tipo de enfrentamiento y desmanes, la indignación

se manifestó como una colorida y entrañable exhibición política y cultural. La espacialidad apropiada por la masa protestante se escrutaba como un paisaje exótico y plausible ante la atenta vigilia del turismo, sobre todo del que provenía del extranjero que, sabiendo las generalidades de la coyuntura que producía dicha instancia, gozaron de su carácter performativo. Los más hozados se animaron a integrarse al cuerpo en movimiento para empaparse del espectáculo, mientras que los más cautos se enfilaban en las veredas para contemplarlo con una sonriente pasividad. A tal punto que podía afirmarse que aquellos del costado eran turistas extranjeros, prácticamente en su totalidad. Nadie quería perderse de la exhibición y no demoraron en almacenar el momento en las memorias de sus dispositivos. Hasta yo me sentí cohibido ante tan inintencionado modelaje.

La jornada terminó donde iniciamos, no sin antes culminar con estrepitosos bailes que invitaban a la gente presente a danzar. No me extrañó percibir una íntima indignación de locatarios que observaban con el ceño fruncido cómo todo se teatralizaba a merced del turismo; regocijados por las exóticas y latentes expresiones indígenas, los turistas cumplían con uno de los propósitos de su visita. El plus añadido por el estallido generaba unidad entre quienes nos uníamos en su propia dinámica, pero también fue un producto más para el consumo del turismo extranjero: los turistas ya no solo disfrutaban del sujeto de por sí,

sino también enmarcado en un contexto revolucionario. Yo, fatigado, proseguí a descansar; mi rumbo se encontraba allende a las montañas.

16 de noviembre de 2019

Quetena Chico, Bolivia.

El Acuerdo por la Paz y el declive del estallido

Justo el día que arribé hacia el desierto de Lípez a hacer trabajo de campo en la comunidad de Quetena Chico, a las alturas del altiplano boliviano, por encima de los 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar, se firmó uno de los acuerdos políticos más importantes en la historia de Chile; al menos, el más importante desde el retorno a la democracia. Muy controversial, por cierto. Durante todo el transcurso de aquel jueves 14 de noviembre estaba en boca de todos que se estaba cocinando un acuerdo político, el cual buscó encauzar institucionalmente el estallido social para así poder revertir el clima de lucha permanente que se había normalizado en casi un mes de bullosas e incesantes movilizaciones. Un breve lapsus de anarquismo, en el cual la ciudadanía movilizaba casi en su totalidad se había apoderado del espacio público, cuya disociación con la clase política era una renuncia convincente a la representación de los mismos más que una mera desconexión. A esa altura, y como nunca, no solo no representaban, sino que eran percibidos como parte del problema de la amplia crisis de representación política y, por lo tanto,

su exclusión se veía en buena parte necesaria y justificada.

Poco más de dos semanas estuve en campo, en una de las zonas más hostiles para la vida humana en Sudamérica, y absolutamente desconectado de aquellos dispositivos tecnológicos que sirvieron como, y por lejos, la mejor herramienta comunicacional desde que «Chile despertó». No por mera voluntad, claro, sino que en la comunidad no había señal que pudiera penetrar aquella altitud y, si bien me permitió concentrarme más en mis haberes, también quedé aislado de la vorágine del estallido. Solo escuchaba y conversaba con los comunarios lo que estaba sucediendo en Bolivia, que podía leerse en clave de estallido social o de golpe de Estado, según los ojos que lo miraran. Sin embargo, me generaba incertidumbre no saber el estado actual del acontecer chileno, pues sabíamos que era un momento histórico, rupturista, transformador, pero, así, difícil de sostener en el tiempo por las condiciones ciertamente anómalas que lo caracterizaron. Por eso, cuando bajé de las alturas, no me sorprendió enterarme de que se había abierto una vía política al asunto, pero sí me sorprendió saber en las condiciones que se realizó.

A las 2:24 de la madrugada del 15 de noviembre salió humo blanco del Congreso Nacional. Era el nacimiento del «Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución» y el nombre lo decía todo. El oficialismo y una parte de la oposición acordaron que, para reestablecer el supues-

to orden y la paz en el país, y atendiendo al meollo de las demandas de la ciudadanía, debían generarse las condiciones para la creación de una nueva Constitución para Chile, hecha en democracia y con participación ciudadana. El acuerdo se selló sobre doce puntos muy concretos, pero los centrales fueron: plebiscito de entrada para habilitar la redacción de una propuesta de nueva Constitución, elección del mecanismo mediante el cual se realizará y la composición del mismo, un tiempo predeterminado de nueve meses con la posibilidad de prorrogarlo por tres meses más y un plebiscito de salida ratificatorio, con voto obligatorio, 60 días después de la disolución de dicho órgano.

Cuentan que las negociaciones políticas entre el oficialismo y la oposición fueron feroces. Por eso estuvieron un día completo y más, llegando hasta la madrugada, para formular un acuerdo de una página y media que no dejó a nadie enteramente satisfecho. Así es la democracia, dirán. El oficialismo —es decir, la llamada «derecha democrática»— estaba derrotada: no sabían cómo habían llegado a ese punto de ceder tanto poder. Sabiendo que estaban en jaque, no les quedó otra oportunidad que abrir la posibilidad para un real reemplazo a la Constitución del 80, además de la posibilidad de que un poder constituyente estuviera encargado de redactar la propuesta, sin saber qué tanto control o capacidad de influencia tendrían sobre el mismo, que se elegiría democráticamente en un momento en

que la popularidad de la derecha estaba por el suelo y en el que era muy difícil repuntar. Así, algunas de las victorias que se llevaron fue establecer un tiempo extremadamente acotado para esta colosal tarea, así como que en la papeleta no estuviera el concepto de «Asamblea Constitucional», sino de «Convención Constituyente», ya que entendían que el primero pertenecía a una narrativa de izquierda, mientras que el segundo era más «republicano». La cara de sus representantes, cuando oficiaron el acuerdo, se exhibía como una descripción gráfica de su sector en contexto.

Por otra parte, desde la oposición se podría decir que fue un acuerdo satisfactorio en lo que se negoció, pero también tremendamente impopular. Además de generar las condiciones para el proceso y sus mecanismos, se ganó la garantía de la famosa «hoja en blanco». Es decir, no se partirá desde la base de la actual Constitución, sino desde cero. Pese a que ello significó, aparentemente, una gran victoria, también se leyó como un complot en contra de la rebelión que el mismo pueblo estaba gestando.

En el interior de la izquierda esto causó un gran remezón. Al menos cinco partidos de la oposición no fueron considerados, y la mayor expresión de crisis interna fue que Convergencia Social (CS) se retiró en la mitad del acuerdo, dejando solo al diputado Gabriel Boric, perteneciente a aquel joven partido, quien firmaría a título personal. Esto provocó la renuncia

masiva de cerca de 200 militantes, entre ellos autoridades políticas, y la salida de movimientos que habían fundado al partido, como fue el caso de Izquierda Libertaria (IL). La crítica central fue que este acuerdo no solo le daba un respiro al Gobierno de Piñera y a la derecha en general, sino que directamente lo salvó de una inminente caída. Además, no solo se vislumbraba una eventual, pero cercana abdicación de Piñera, sino que junto con ello se podía sentir que la superación del modelo neoliberal era una cuestión de días, pues la ruptura ya se había producido.

Solo el tiempo permitirá hacer una evaluación de lo acertado o lo desacertado de este acuerdo. Por lo pronto, nos quedamos en la incertidumbre de la ambivalencia: es probable que el Gobierno tiránico de Piñera acabe su periodo en la fecha oficial; la institucionalidad pudo recuperar buena parte del control sobre la sociedad, abriendo la puerta hacia un proceso constitucional, para así recoger las demandas del estallido y democratizarlo. Y, por otra parte, si bien la movilización nacional pudo reconfigurar la correlación de fuerzas políticas y la propia agenda de las mismas, también vio frustrada la reestructuración absoluta e inmediata del orden establecido y la gesta de un nuevo cuerpo social y político en emergencia. Es cierto, pese a lo romántico del estallido, bastante violencia se había derrochado ya, y muchas personas querían salir del estrés social que este generaba y retornar a una normalidad sin renunciar a las necesarias transformaciones por ha-

cer. Además, desde el otro lado del mundo se está hablando de la expansión de un virus que promete ser una gran pandemia y para el que hay que prepararse.

15 de diciembre de 2019

Valdivia, Chile.

Breve consideración luego del «apruebo» a la asamblea constituyente

Luego de estar durante toda la jornada de manera voluntaria defendiendo los votos del «apruebo» como apoderado de mesa, he de considerar que es necesario tener un ejercicio democrático como el de este plebiscito de entrada, pero a un ritmo normal; es decir, para todos los procesos, para todas las elecciones. No por el solo acto de sufragar, cuya importancia ya vimos, sino porque de manera tácita es una fuente inagotable de educación cívica, de discusión, formación y deliberación política. Lo cual, sin duda y claro está, que ha elevado los niveles de discusión y profundizado el análisis, aunque sea en este momento en específico.

Pese a estar atravesando aún por una descollante pandemia, más de siete millones y medio de personas salieron en masa a expresar su voluntad popular en las urnas, alcanzando así la mayor participación electoral de toda la historia de Chile en términos de votos absolutos y la más alta desde que el voto pasó a ser voluntario en el año 2012, aunque, a mi parecer, el voto debería volver a ser obligatorio. Por cierto, creo importante esta



discusión; esto le da más valor aún. Con todo, el proceso constituyente abre muchas instancias de participación directa, como la elección de constituyentes en el 2021, de autoridades municipales, regionales, parlamentarias y presidenciales en el mismo año y el plebiscito de salida en el 2022. ¡A no soltar las calles! Pero tampoco las urnas, la socialización de los espacios familiares y sociales, lo cotidiano.

Ahora bien, ¿cómo no entusiasmarse? Este plebiscito tuvo dos preguntas que fueron respondidas contundentemente: la primera fue: «¿Quiere usted una nueva Constitu-

ción?», y el 78 % del registro electoral votó «apruebo» muy por sobre el 22 % del «rechazo»; la segunda fue «¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?» y el 79 % votó por la «Convención Constitucional» por sobre el 21 % de «Convención Constitucional Mixta». La diferencia de esta última es que la convención mixta era una mezcla entre el 50 % de los miembros electos democráticamente para estos fines, mientras que el otro 50 % serían los parlamentarios en ejercicio. En cambio, y por suerte, la Convención Constitucional será el 100 % de los miembros electos democráticamente para estos fines, lo

cual es un muy buen augurio para todo lo que se viene.

Pero también, ¿cómo no preocuparse? El proceso si bien está tomando corporalidad, no debemos dormimos en los laureles y menos aún desatender que saliendo de la «derechización» de los gobiernos en América Latina es predecible que empezaremos a girar hacia gobiernos progresistas y de izquierda. A lo que más temo es que se desaproveche esta oportunidad histórica y que todo siga igual, o peor, que este vuelco a las izquierdas sea más de lo mismo, forzando, en efecto, un eventual regreso hacia una derecha rehabilitada,

más sofisticada y con la capacidad no solo de prevenir estos estallidos sociales, sino también de abortarlos prematura y permanentemente.

28 de octubre de 2020

Valdivia, Chile

El proceso constituyente y las elecciones presidenciales en Chile. ¿Transitando hacia un modelo post-neoliberal?

A fin de este año, Chile decidirá quién será el futuro gobierno que presidirá al país en los próximos cuatro años. Estas son, sin duda, las elecciones presidenciales más importantes desde el retorno de la democracia en los 90, y tal vez la más importante en toda la historia, según el estricto rigor democrático. Esto, no solo porque al fin se superará el duopolio presidencial que intercalaron Michelle Bachelet (2006-2010; 2014-2018) y Sebastián Piñera (2010-2014; 2018-2022) en la última década y media, traspasándose el ejecutivo entre el bloque centroizquierda, encabezado por el Partido Socialista (PS), y la derecha, comandada por Renovación Nacional (RN), respectivamente, lo que constituyó una especie de bipartidismo entre la Nueva Mayoría y Chile Vamos, conglomerados de izquierda y derecha respectivamente, sino porque también hay una serie de factores y condiciones que demuestran que no estamos simplemente frente a un mero cambio de gobierno, sino que, ante todo, nos enfrentamos a un proceso de trans-

formación estructural que abre la posibilidad histórica de superar el modelo neoliberal.

Dentro de la vía institucional nos encontramos con dos caminos por los cuales se transita de forma paralela para desembocar, esperemos, en esta gran transformación. Ambos caminos, sin embargo, se entrecruzan, yuxtaponen y co-construyen, de manera tal que es imprescindible generar una coherencia y cohesión entre ambos, para que el cambio elemental sea efectivo. Esto, puesto que, si uno llega a buen puerto, pero el otro no, quedaremos constreñidos en una contradicción de difícil salida.

Uno de estos caminos es el proceso convencional constituyente, lo que fuese el polémico resultado político de la revuelta del 2019 y que, a propósito, está recién comenzando. Por primera vez en toda la historia nacional se redactará una carta magna de manera democrática y vinculante en su construcción. La convención será el primer órgano constituyente paritario del mundo (77 mujeres y 78 hombres), que contará además con 17 escaños reservados para los 10 pueblos originarios reconocidos, con una amplia presencia de listas de independientes; es decir, representantes de los movimientos sociales que no pertenecen a partidos políticos y con todos los territorios representados de los 28 distritos. Con independencia de su resultado, su composición de por sí es una victoria. En un genuino ejercicio democrático, pues se verán los 20 millones de chilenos y chilenas representados en 155 con-

vencionales constituyentes.

Las demandas son claras: reconocimiento y garantías de los derechos fundamentales en materia de educación, vivienda, salud, pensiones. Reconocimiento a los pueblos originarios y del Estado plurinacional, como también la impostergerable fijación del agua como un bien nacional de uso público, asegurando que sea inapropiable para privados. Porque sí, Chile es el único país del mundo que faculta constitucionalmente el aprovechamiento del agua por parte de los privados, siendo estos algunos de los pilares que edifican la arquitectura del modelo, como también las piedras angulares de muchos de los conflictos desencadenados. Este órgano celebrará la sesión inaugural este 4 de julio en el ex Congreso Nacional de Santiago, para iniciar con la laboriosa responsabilidad de discutir, sistematizar y escriturar una nueva Constitución Política del Estado, en un plazo aproximado de un año, para luego someterlo al plebiscito de salida como instancia última.

El otro camino, para nada menos intrincado, es el de la carrera presidencial. Al momento, son 8 los candidatos y 3 las candidatas, 11 en total, los que se perfilan para disputar la máxima autoridad política del país, que tendrá la responsabilidad histórica de asumir un país que clama por una transición de régimen y de recibir, eventualmente, una nueva carta magna. Esta carrera presidencial constará de dos etapas: las primarias del 18 de julio y las de-

finitivas del 21 de noviembre, con posibilidad de una segunda vuelta establecida para cuatro domingos después; es decir, para el 19 de diciembre. La primera tendrá la participación de dos coaliciones antagónicas. El pacto «Chile Vamos» resolverá quién de los cuatro candidatos representará al sector mayoritario de la derecha, siendo Joaquín Lavín (UDI), el alcalde de Las Condes, el que corre con ventaja. Mientras que el bloque «Apruebo Dignidad» tendrá que decidir entre el diputado Gabriel Boric (Convergencia Social) y el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (Partido Comunista), siendo este último no solo el aventajado en las primarias, sino el que se perfila como el «candidato del pueblo», acaso el más legitimado en el Chile post 18-O, llamado a triunfar en las presidenciales definitivas y a comandar la mudanza societal que se despunta. Mientras que los y las candidatas restantes podrán presentarse mediante pactos o de forma independiente, pero que sin embargo no tendrán cabida en las primarias, y saltarán directamente a las de fin de año.

En definitiva, ¿por qué hablo de la transición hacia un modelo post-neoliberal? ¿A qué va este antenombre? Es que, sin el afán de inventar retóricas improcedentes, podemos afirmar que estamos frente a una crisis social total del modelo neoliberal, y que todos los obstinados esfuerzos que se han realizado en estos últimos dos años apuntan a su inminente superación, a como dé lugar. Más aún, si la estructura

ceñida y los pilares sobre los cuales se erigió el modelo fueron desmoronados o están cerca a desmoronarse, como consecuencia del prolongado terremoto social.

A propósito, recuerdo haber leído con entusiasmo la división temporal que Fernanda Wanderley (2009) escribe sobre Bolivia, indicando que dicho país se encaminó a este estadio post, entre el 2006 y el 2009, ante la llegada de un presidente indígena que efectivamente rompió con los paradigmas profundamente enquistados en la memoria histórica y colectiva de dicho país, de una tenaz raigambre colonial. Además, se impulsó en conjunto todo un proyecto político popular y reivindicativo que supo dar origen a una nueva Constitución Política del Estado y un nuevo pacto social, cambiando la matriz productiva, garantizando derechos fundamentales, reconociendo a la inconmensurable diversidad étnica preexistente al Estado-nación boliviano y promoviendo la reinención o la mantención de sus modos de vida ancestrales, con todo lo que ello significa. ¿Bolivia dejó de ser capitalista? No, en lo absoluto. ¿Elevó su calidad de vida? ¿Avanzó hacia una sociedad más justa? ¿Pudo establecer un pacto social que avanzara hacia el buen vivir? Sin duda que sí. De tal manera, los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), encabezado por Evo Morales, son, por escándalo, los mejores y más representativos de toda su historia nacional, sin eximirlo de todas las legítimas críticas en su contra.

Creo que en Chile está sucediendo algo muy similar, pero claro que, ajustado a su particularidad histórica, de abismales diferencias. Por ello, he de considerar que este proceso transformador está *ad portas* de superar dos de los principales avatares del neoliberalismo: el fin del fantasma del anticomunismo y la sustitución de la Constitución Política del 80, formulada y escriturada desde las entrañas de la dictadura militar. Recordemos que el neoliberalismo es el modelo de sociedad conspicuo que se instaló en Chile luego de la intervención fáctica de Estados Unidos al Gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende, cuyo boicot eclosionó en el violento derrocamiento por parte de las Fuerzas Armadas, aquel oscuro 11 de septiembre de 1973. El régimen tiránico que se impuso inmediatamente después del golpe de Estado fue la etapa de elaboración del modelo, el cual se concretó mediante las dos vicisitudes anteriormente mencionadas; es decir, la construcción de una doctrina total y absolutamente anticomunista, y la creación de una nueva institucionalidad, prácticamente desde cero, a merced de las aspiraciones de los grupos económicos que se alinearon al mercado mundial capitalista.

Pero no solo eso, como si fuera poco, sino que evidentemente estableció el marco normativo y legislativo que rigió a nuestra sociedad durante estos 30 años, sin tener la posibilidad real de realizar cambios profundos por la vía institucional. Esto fue lo que Jaime Guzmán,

quien fuese su principal autor intelectual, llamó «democracia protegida». Él lo explicó así, según sus propias palabras:

“La Constitución debe procurar que, si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhela, porque —valga la metáfora— el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario” (Guzmán, 1979, p. 19).

Esta famosa y tenebrosa declaración se valora por su sincera ambivalencia, pues en un par de líneas esclarece el problema y la solución. He allí la apremiante necesidad de tirar este estatuto supremo al basurero de la historia y conformar uno nuevo, sin herencias ni transmutaciones.

Porque la gente se cansó de estar inserta en un modelo impuesto de facto y arbitrariamente, el cual especuló como milagroso el resultado de «el ladrillo», el programa económico ceñido por los Chicagos Boys, cuyo único milagro fue mostrar tendenciosas cifras que hablaban de un éxito macroeconómico para una plutocracia minoritaria, mientras que la situación socioeconómica de la inmensa mayoría quedaba barrida por debajo de esta alfombra estadística. Los estudios económicos demuestran que Chile es de los países más desiguales

del mundo: el 1 % más rico tiene, proporcionalmente, mayor concentración de la riqueza que el 1% de países como EE. UU., Inglaterra y Japón; además, sus ingresos son 40 veces mayores al ingreso per cápita del 81 % de la población total. Esta situación se aplica perfectamente al antipoema de Nicanor Parra: «Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. Consumo promedio: un pan por persona».

Por lo tanto, es clave que la próxima presidencia esté comandada por alguien que sepa dirigir un proyecto político genuinamente transformador, y que no intente seguir la lógica en la que tanto se basó la izquierda neoliberal: la de realizar el cambio social mínimo mientras se parchan las grietas de un modelo sistemáticamente injusto con un éxito ilusorio. Lo esperable es que la carrera presidencial enfrente en última instancia a Joaquín Lavín y Daniel Jadue. Mientras que el primero fue fiel colaborador de la dictadura militar, admirador eterno del tirano Pinochet y de Jaime Guzmán, y la mejor carta de la derecha, el centro, y seguramente alguno que otro sector de los que se hacen llamar «de izquierda», para poder sostener los fragmentos del caducado modelo o para truncar el cambio de las mayorías, el segundo es, sin duda, todo lo contrario. Hace muchísimo tiempo que Daniel Jadue es de los políticos más legitimados de Chile y su llegada a la presidencia sería histórica de por sí, al convertirse eventual-

mente en el primer presidente militante del Partido Comunista. Como alguna vez entonó Allende en su último discurso: las grandes alamedas parecieron abrirse en la revuelta, ahora nos transitar y consolidar el proyecto societal alternativo que permita la superación del neoliberalismo.

Finalmente, quedaron fuera muchos temas centrales de la discusión. Como ahondar en el programa presidencial estrenado hace algunos días, el cual será su carta de presentación para las campañas. También, en concreto, cuáles son las propuestas concretas que impulsarán las transformaciones estructurales que tanto clama la ciudadanía, más allá del diagnóstico. Espero, sin embargo, sobre todo para la gente que no habita en Chile, haber ayudado a comprender, aunque sea someramente, el momento histórico que estamos atravesando, entendiendo también que estas transformaciones no pasan desapercibidas en la región, por lo que es clave impulsarlas en y desde la indómita América Latina. ¡Mil veces venceremos!

Referencias

- Guzmán, E. J. (1979). *El camino político*. *Revista Realidad*, 1(7), 13-23.
- Wanderley, F. (2009). *Crecimiento, empleo y bienestar social: ¿Por qué Bolivia es tan desigual?* Plural editor. ■